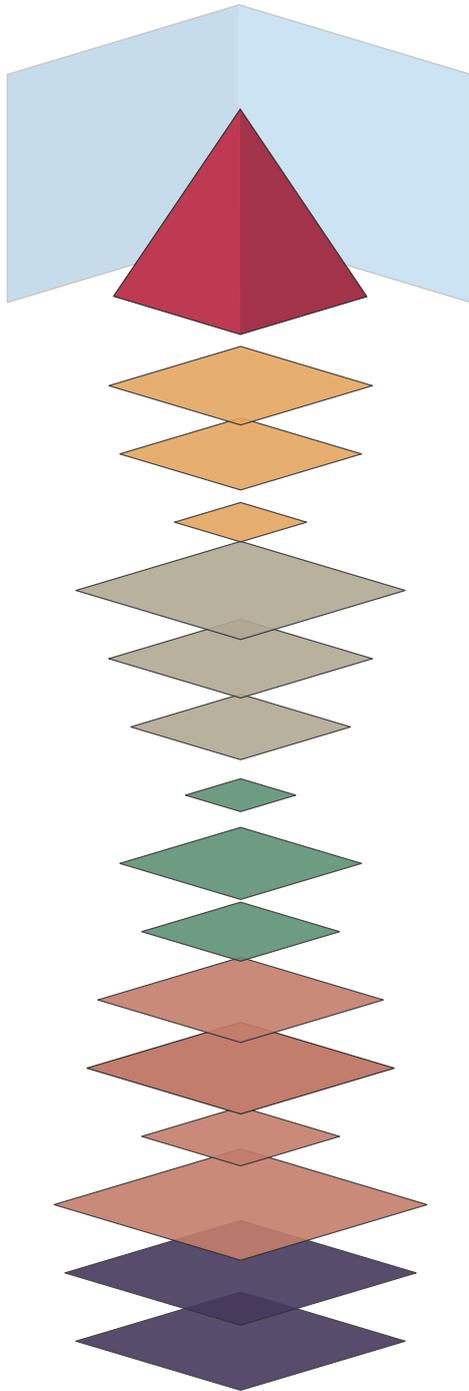


ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



5,67

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

67.º de 193 países

16.º de 35 países americanos

1.º de 2 países de América del Norte



MERCADOS CRIMINALES

5,83

TRATA DE PERSONAS **6,00**

TRÁFICO DE PERSONAS **5,50**

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN **3,00**

TRÁFICO DE ARMAS **7,50**

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS **6,00**

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO
SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES **5,00**

DELITOS CONTRA LA FLORA **2,50**

DELITOS CONTRA LA FAUNA **5,50**

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES **4,50**

COMERCIO DE HEROÍNA **6,50**

COMERCIO DE COCAÍNA **7,00**

COMERCIO DE CANNABIS **4,50**

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS **8,50**

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA **8,00**

DELITOS FINANCIEROS **7,50**



ACTORES CRIMINALES

5,50

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO **5,50**

REDES CRIMINALES **6,00**

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO **4,50**

ACTORES EXTRANJEROS **5,50**

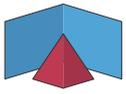
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO **6,00**



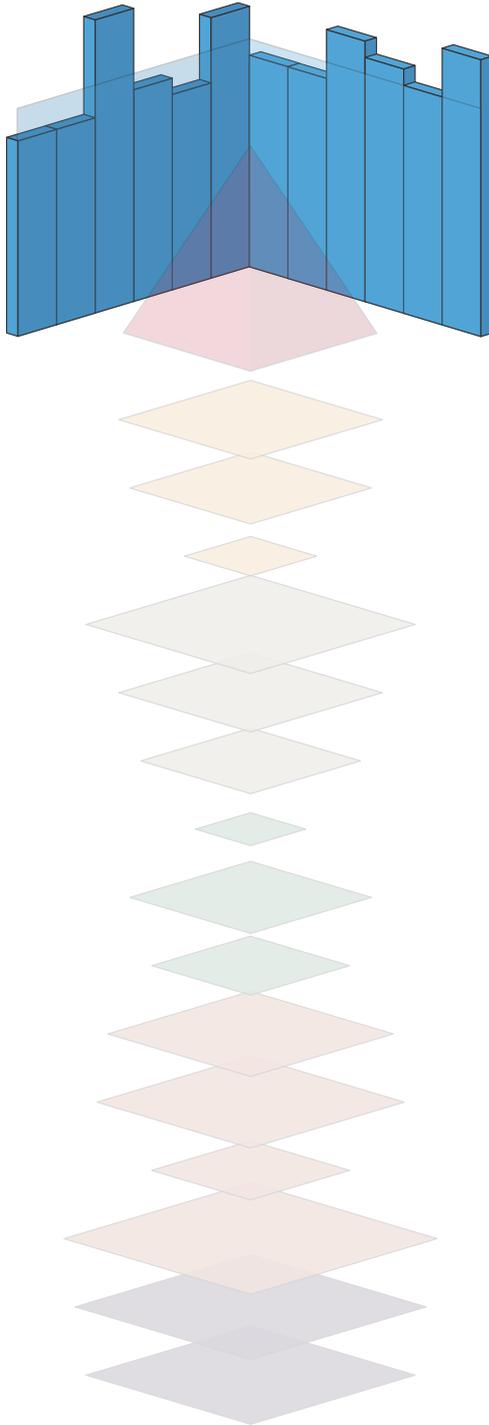
7,13

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA



7,13

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

24.º de 193 países

3.º de 35 países americanos

2.º de 2 países de América del Norte

| | |
|--|------|
| LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA | 6,00 |
| TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 6,00 |
| COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 9,00 |
| POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES | 6,50 |
| SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN | 6,00 |
| CUERPOS DE SEGURIDAD | 8,00 |
| INTEGRIDAD TERRITORIAL | 6,50 |
| LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO | 6,50 |
| CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA | 8,00 |
| APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS | 7,50 |
| PREVENCIÓN | 7,00 |
| ACTORES NO ESTATALES | 8,50 |



5,67

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 5,83



ACTORES CRIMINALES 5,50



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Aunque impulsado principalmente por la demanda local, el mercado estadounidense de la trata de seres humanos obtiene beneficios tanto a escala nacional como internacional. Las redes delictivas extranjeras dominan el mercado y la mayoría de las víctimas proceden de México, Honduras y Estados Unidos. Entre los grupos vulnerables se encuentran los jóvenes sin hogar, los menores en los sistemas de bienestar infantil y justicia juvenil, los trabajadores no ciudadanos, los discapacitados, las personas LGBTQ+, los drogadictos, las mujeres y las niñas indígenas y las víctimas de violencia doméstica. Internet y las redes sociales han sustituido en gran medida a los lugares tradicionales de captación de víctimas del tráfico sexual.

Existe un mercado de tráfico ilícito de personas muy consolidado a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, en el que diversos delincuentes nacionales y extranjeros, así como funcionarios estadounidenses y mexicanos, facilitan la entrada clandestina de personas en Estados Unidos. Aunque los ciudadanos mexicanos siguen siendo el principal grupo de migrantes introducidos ilegalmente en el país, muchos otros proceden de Honduras, Guatemala y El Salvador. En los últimos años también ha aumentado el tráfico ilícito de migrantes procedentes de países como Ecuador, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, vinculado principalmente al deterioro de las circunstancias sociopolíticas tras la pandemia de la COVID-19. Los costes del tráfico de personas han aumentado y las víctimas son cada vez más susceptibles a sufrir diversas formas de explotación, incluido el tráfico de drogas. Antes de que se revirtieran las políticas restrictivas de la COVID-19, muchos solicitantes de asilo se veían obligados a permanecer en zonas inseguras del norte de México, bajo amenazas de violencia y extorsión por parte de grupos delictivos locales.

Aunque tanto los grupos delictivos nacionales como los transnacionales que operan en EUA llevan a cabo extorsiones y cobros ilegales por protección, estas actividades delictivas no son generalizadas en el país y en los últimos años solo se han registrado casos limitados y esporádicos.

TRÁFICO

El mercado estadounidense del tráfico de armas es amplio y considerable y el país sirve tanto de origen como de destino de armas de fuego difíciles de adquirir, incluidas las ametralladoras. Las armas que se trafican dentro y fuera de las fronteras estatales contribuyen significativamente a la violencia doméstica, pero el alcance del mercado también

es transnacional. Estados Unidos, por ejemplo, es una de las principales fuentes de armas y munición extranjeras ilícitas en Brasil y es responsable de gran parte de las armas incautadas en México. Las armas procedentes de Estados Unidos suelen acabar en manos de bandas armadas, narcotraficantes y organizaciones terroristas en el extranjero, lo que suscita polémicos debates sobre los vínculos entre la proliferación de armas, la violencia criminal y el terrorismo global. En los últimos años, la creciente gravedad de la violencia armada ha reavivado el debate sobre el control de armas y ha polarizado aún más las divisiones partidistas, con un número récord de muertes domésticas relacionadas con las armas, incluidos suicidios, homicidios y tiroteos masivos.

Los delitos de falsificación causan importantes pérdidas económicas a la economía estadounidense, que se elevan a miles de millones de dólares anuales. El aumento de las importaciones falsificadas a través de plataformas en línea y el fácil acceso a los consumidores radicados en EUA mediante empresas de transporte internacional han provocado un aumento de los productos ilícitos que circulan por el país. La mayoría de los productos que infringen la propiedad intelectual se importan de Asia, principalmente de China, seguida de Turquía y de Vietnam. Los artículos de lujo falsificados, como relojes, joyas, bolsos, carteras y artículos de consumo electrónicos, representan la mayor parte de los productos falsificados incautados en Estados Unidos.

Aunque Estados Unidos grava con impuestos especiales diversos bienes y actividades, hay pocos indicios de que exista un comercio ilícito significativo de productos sujetos a impuestos especiales, salvo en el caso de los cigarrillos. En algunos estados se registra la venta de cigarrillos en el mercado negro y gris, debido a los excesivos impuestos, lo que da lugar al transporte de productos del tabaco entre estados con impuestos bajos y estados con impuestos altos y diversas tierras tribales de nativos americanos. Nueva York registra el mayor índice de tráfico ilícito de cigarrillos entrantes, seguido de California, Washington, Nuevo México y Minnesota. Por otro lado, New Hampshire registra el mayor índice de tráfico ilícito de salida de cigarrillos, seguido de Idaho, Virginia, Wyoming y Dakota del Norte. El contrabando de cigarrillos es un importante problema nacional, que plantea retos a escala subnacional, nacional y mundial.

MEDIOAMBIENTE

En EUA, el robo de plantas ha aumentado significativamente y hay informes recientes que muestran que el robo de plantas de dudleya en California ha causado graves daños medioambientales. A pesar de estar en peligro de extinción, debido a la demanda asiática, la raíz de ginseng, protegida

por la CITES, no ha sido clasificada como especie en peligro por las autoridades estadounidenses. Los enfrentamientos relacionados con estos robos han causado víctimas mortales y, aunque son poco frecuentes, algunos ladrones se enfrentan a penas de prisión. Si bien Estados Unidos no es conocido por la tala ilegal generalizada, importa madera de países con altos índices de tala ilegal, como la madera latinoamericana y la caoba hondureña.

Los delitos contra la fauna y la flora silvestres son un problema importante en Estados Unidos, que sirve de origen, tránsito y destino para el comercio ilegal de fauna y flora silvestres y productos derivados. El comercio ilegal afecta tanto a animales como a productos de origen nacional y extranjero y la falta de una estrategia global para combatirlo en el país hace que productos de gran valor acaben a menudo en manos de consumidores desprevenidos. La explotación de la fauna salvaje ha causado importantes daños medioambientales, con la consiguiente pérdida de especies y hábitats autóctonos. El mercado del tráfico de especies silvestres en el país sigue siendo una empresa criminal lucrativa, valorada en miles de millones de dólares anuales.

El mercado ilegal de oro en Estados Unidos procede principalmente de Latinoamérica, incluidos países como Venezuela y Colombia, y se introduce de contrabando en el país mediante avionetas, aviones fletados o utilizando documentación fraudulenta. El oro se vende a refinadores estadounidenses o extranjeros que, a su vez, venden lingotes de oro a empresas multinacionales. Los delincuentes, tanto nacionales como extranjeros, participan en el comercio de otros metales, minerales y piedras valiosos, como plata, cobre, carbón, esmeraldas y uranio, procedentes de países como México, Colombia, Perú y Guyana. A pesar de la prohibición del oro venezolano por parte de islas caribeñas como Curaçao y Aruba, el comercio continúa a través de otros países latinoamericanos con escasa regulación o aplicación de la ley por parte de las autoridades estadounidenses. El oro está clasificado como mercancía y no como instrumento monetario, lo que impide a las autoridades estadounidenses combatir el blanqueo de dinero vinculado a los flujos ilegales de oro.

DROGAS

El tráfico de heroína está muy extendido en Estados Unidos y estrechamente relacionado con el fentanilo, que ha provocado un aumento de las adicciones a los opiáceos y una grave crisis de salud pública. Los grupos mafiosos mexicanos tienen gran influencia en el mercado, controlan las rutas de contrabando y colaboran con las redes delictivas estadounidenses para transportar heroína por todo el país. Aunque la heroína de origen mexicano domina el mercado, también entra en el país heroína procedente de Colombia y de Afganistán por vía marítima y aérea. El tráfico de heroína estadounidense también alimenta la violencia territorial, se ha relacionado con un aumento de los niños en programas de acogida y contribuye a la transmisión de

enfermedades, como la hepatitis C y el VIH, a través de jeringuillas compartidas. A pesar de la disminución de los delincuentes identificados por tráfico de heroína y de las incautaciones de heroína, las muertes relacionadas con los opiáceos en Estados Unidos han aumentado en los últimos años.

EUA tiene un comercio de cocaína grande y consolidado, dominado por grupos delictivos colombianos para el suministro, por redes mexicanas para el transporte y por bandas radicadas en EUA para la distribución al por menor. La mayor parte de la cocaína introducida de contrabando en EUA llega a través de la frontera entre EUA y México. Aunque el consumo de cocaína ha disminuido ligeramente, debido a la mayor disponibilidad de drogas más baratas, como los opiáceos, las sobredosis siguen siendo una amenaza habitual, especialmente porque la cocaína se mezcla cada vez más con fentanilo o con otros opiáceos sintéticos. El aumento de la producción y la disponibilidad de cocaína en los últimos años ha convertido a la cocaína de origen colombiano en el principal motor del comercio de cocaína estadounidense, seguido de Perú.

El comercio de cannabis en Estados Unidos se encuentra entre los 10 más importantes del mundo, pero su legalidad varía de un estado a otro, lo que dificulta la evaluación de la criminalidad del mercado. Mientras que algunos estados permiten tanto el uso médico como el personal del cannabis, otros solo permiten el uso médico o lo prohíben por completo, lo que da lugar a un marco jurídico fragmentado y en desarrollo, que genera incertidumbre entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y obstaculiza las iniciativas estatales para combatir la delincuencia relacionada con el cannabis. La mayor parte del cannabis que circula en el país es producido ilícitamente por organizaciones de narcotraficantes con sede en EUA y cultivadores locales con licencia estatal, mientras que también se introduce en EUA marihuana de origen extranjero, procedente de México, Canadá y el Caribe. Sin embargo, la marihuana de origen mexicano y caribeño se considera de calidad inferior a la de origen estadounidense y canadiense.

El comercio de drogas sintéticas en Estados Unidos es uno de los mayores del mundo y supone una importante amenaza para la salud pública y la seguridad nacional. Los opiáceos sintéticos, como el fentanilo, dominan el mercado y gran parte de las muertes por sobredosis están relacionadas con esta droga. Los cárteles de la droga mexicanos importan materias primas de Asia para producir y traficar con fentanilo, junto con versiones falsificadas de medicamentos populares, como Adderall y Valium. La metanfetamina de origen mexicano también se consume habitualmente, pero la represión de los precursores químicos ha dado lugar a una peligrosa reformulación por parte de los cárteles mexicanos de la droga. La aparición de un nuevo opioide sintético, llamado «isotonitazeno», también es preocupante. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad estadounidenses para combatir el

tráfico de drogas sintéticas, las transacciones de fentanilo en la red oscura y las rutas tradicionales del narcotráfico siguen planteando problemas.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

En comparación con otros países, se considera que Estados Unidos presenta un alto riesgo de ciberdelincuencia. Entre los delitos ciberdependientes que más se cometen se encuentran los ataques de ransomware, la piratería informática y las violaciones de datos personales, que provocan pérdidas anuales de miles de millones de dólares. Los ataques de ransomware han tenido como objetivo grandes sumas de dinero y han afectado a sectores de infraestructuras críticas, como la base industrial de defensa, la alimentación y la agricultura, las instalaciones gubernamentales y la tecnología de la información. Las bandas de ransomware con base en Rusia son los atacantes más agresivos de las empresas estadounidenses y el aumento de los ataques de ransomware puede atribuirse a las deficientes medidas de seguridad de las empresas y a una floreciente industria del ransomware como servicio. Los informes indican que un número significativo de empresas afectadas han pagado rescates, pero más de la mitad pudieron recuperar sus datos perdidos. Las estafas emergentes que implican tokens no fungibles y criptomonedas como el bitcoin también constituyen una amenaza significativa.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros se han convertido en un problema cada vez más acuciante en Estados Unidos. Un número creciente de ciudadanos son víctimas del fraude y pierden colectivamente miles de millones de dólares cada año. Las estafas de impostores y de compras se encuentran entre los tipos de fraude más comunes. También han aumentado en los últimos años las estafas relacionadas con el correo electrónico comercial y la usurpación de identidad. Mientras que estados como Georgia, Maryland, Delaware, Nevada y Florida han notificado el mayor número de quejas por estafas, California ha experimentado las mayores pérdidas económicas por estos delitos. Uno de los factores que contribuyen a la prevalencia de los delitos financieros en Estados Unidos son las diferentes normativas financieras de los distintos estados, que han permitido que algunos de ellos se conviertan en paraísos fiscales para la evasión de impuestos extranjeros. Delaware, Nevada, Wyoming y Dakota del Sur figuran entre los estados más arriesgados en este sentido. Se estima que la evasión fiscal alcanza más de un billón de dólares en pérdidas anuales y que los ingresos fiscales representan un porcentaje menor del PIB que en la mayoría de los otros momentos de la historia reciente de Estados Unidos. En el 2021, las empresas ricas fueron responsables de más de la mitad de los ingresos fiscales no pagados en Estados Unidos.

ACTORES CRIMINALES

Al parecer, las redes y las bandas delictivas más pequeñas, en particular las especializadas en el tráfico de drogas, son las que más atención reciben de los investigadores y los fiscales estadounidenses. Existen decenas de miles de bandas delictivas activas en todo el país. Las redes y las bandas delictivas colaboran a menudo con redes extranjeras de narcotráfico y emplean altos niveles de violencia para llevar a cabo sus operaciones. Se sabe que los agentes del sector privado de Estados Unidos están muy implicados en delitos financieros, como la evasión fiscal y las tramas corruptas, que son difíciles de detectar y suelen estar vinculadas a la corrupción política. Aunque la corrupción en el sector privado estadounidense es relativamente baja, supone un riesgo importante para la economía y la sociedad en su conjunto, con consecuencias potencialmente devastadoras para la confianza pública en las instituciones clave.

Los grupos de tipo mafioso siguen siendo actores criminales activos en Estados Unidos. Diversas mafias siguen operativas en el país, donde se calcula que tienen su base varios miles de asociados. Ejercen control territorial sobre zonas como Nueva York, el sur de Nueva Jersey y Filadelfia. Además, grupos de tipo mafioso siguen operando en Chicago y en otros lugares, a veces formando alianzas con otras empresas delictivas. Estos grupos se dedican al tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y el fraude sanitario dirigido a Medicare. Los miembros de estos grupos tienen fácil acceso a las armas y las portan abiertamente. Los grupos mafiosos también están relacionados con el chantaje laboral, la extorsión y la corrupción sindical. Las bandas de motoristas ilegales han participado en asesinatos de tipo mafioso. Los grupos delictivos extranjeros también tienen una influencia significativa en diversas actividades delictivas en Estados Unidos, como el tráfico de drogas y de seres humanos, la ciberdelincuencia y la interferencia electoral. Las organizaciones delictivas centroamericanas dominan el mercado del narcotráfico, pero los grupos mexicanos, dominicanos y colombianos también tienen su parte. Los grupos delictivos asiáticos controlan el tráfico de cannabis, MDMA y precursores químicos. Además del tráfico de drogas y de seres humanos, los actores extranjeros también desempeñan un papel importante en la ciberdelincuencia.

Siguen siendo escasas las pruebas que vinculan directamente a los agentes estatales con los mercados de la delincuencia organizada, tanto a escala nacional como transnacional. De hecho, es poco frecuente la corrupción en el sector público y en los sectores de la contratación pública y la administración fiscal de la economía estadounidense. Sin embargo, la proliferación de la corrupción local entre los funcionarios estadounidenses, especialmente en relación con la actividad delictiva transnacional a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, es cada vez más preocupante.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Los recientes desafíos, incluida la pandemia de la COVID-19, pusieron de manifiesto los problemas estructurales del Gobierno federal y subrayaron las diferencias de fuerza de los órganos de Gobierno locales y estatales. Además de los problemas internos, Estados Unidos se enfrenta a conflictos externos, tensiones nucleares con Corea del Norte e Irán, tensiones comerciales y relacionadas con Taiwán con China y campañas de influencia exterior de Rusia y China. El panorama político está polarizado, lo que dificulta la aplicación de la agenda de cualquier Gobierno y supone un riesgo para la economía local y mundial, debido a la politización del techo de la deuda. En este contexto, sin embargo, Estados Unidos ha demostrado ser capaz de hacer frente a la situación de la delincuencia organizada en el país, con pruebas que indican que el Estado es lo suficientemente sólido para afrontar el reto. No obstante, el crimen organizado sigue siendo un problema importante, con continuos retos para la gobernanza, debido a las profundas divisiones políticas sobre las estrategias anticorrupción. Aunque el Gobierno actual ha puesto en marcha iniciativas para abordar los problemas de transparencia y rendición de cuentas, siguen pendientes varias reformas legislativas.

Estados Unidos es signatario de varios tratados y convenios internacionales relacionados con la delincuencia organizada y por lo general cumple la normativa internacional contra la delincuencia organizada. La administración actual ha incrementado los esfuerzos de cooperación internacional en comparación con la anterior. Se reincorporó al Acuerdo del Clima de París y se está centrando en los tratados de extradición, especialmente debido al aumento de la ciberdelincuencia. Las relaciones entre Estados Unidos y México han permitido en el pasado procesos de extradición relativamente fluidos, pero las tensiones han aumentado, a causa de diversos incidentes relacionados con cargos por narcotráfico. Sin embargo, las autoridades estadounidenses han recurrido en gran medida al apoyo mexicano para combatir la inmigración irregular a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, EUA ha colaborado con los aliados de la OTAN para proporcionar ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Estados Unidos cuenta con un sólido marco jurídico contra la delincuencia organizada, que tipifica diversas formas de delincuencia y establece procedimientos de investigación, detención, enjuiciamiento, sentencia y castigo. La actual administración ha puesto en marcha varias reformas legales, como la derogación de políticas y leyes anteriores sobre conservación de la energía, protección del medio ambiente, visados H1-B y otras cuestiones. Una de las reformas más controvertidas ha sido la derogación de la anterior política de facilitar la deportación extrajudicial de personas objeto de contrabando y solicitantes de asilo durante la pandemia de la COVID-19.

Además, la reforma legislativa en materia de lucha contra la falsificación ha recibido amplio apoyo y se ha modificado una ley para exigir a los mercados en línea que apliquen prácticas preventivas, como la verificación de la identidad de los vendedores y la detección de falsificaciones, antes de que los productos de los vendedores aparezcan en la plataforma. La falta de legislación federal contra las armas, que ha dado lugar a una dependencia cada vez mayor de la legislación de cada estado, ha hecho que el transporte de armas a través de las fronteras estatales sea un asunto relativamente fácil. Las lagunas en diversas políticas estatales, como las variaciones en el requisito de comprobación de antecedentes para la compra de armas, también hacen que la legislación estatal sea fácil de explotar. Estas deficiencias han provocado un alarmante aumento de los tiroteos masivos en Estados Unidos.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

En los últimos años se ha observado una creciente politización del sistema judicial estadounidense y la preocupación por los nombramientos judiciales partidistas y la recaudación de fondos para las campañas ha suscitado temores de parcialidad judicial. Tanto la administración anterior como la actual han realizado nombramientos judiciales sin precedentes. Además, los funcionarios ejecutivos y legislativos de algunos estados han tratado de influir en los asuntos judiciales estatales, lo que ha reducido la independencia judicial. Entre los problemas que afectan al sistema judicial estadounidense y conducen a elevadas tasas de encarcelamiento figuran las deficiencias del sistema de libertad condicional, la escasez de fondos para la defensa pública, los prejuicios raciales y la imposición de tasas judiciales por delitos menores. A pesar de ello, existe un marco suficiente para responder a los principales problemas de la delincuencia organizada. Estados Unidos tiene actualmente la mayor población carcelaria conocida del mundo, con millones de personas encarceladas o en prisión preventiva en prisiones federales o estatales. El amplio uso de la negociación de los cargos y la superpoblación de las prisiones estadounidenses también suscitan preocupación, aunque la Administración Biden ha realizado esfuerzos en relación con el encarcelamiento excesivo. El uso de la pena de muerte ha disminuido significativamente a lo largo de los años.

Varios organismos del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional se ocupan de la delincuencia organizada a escala federal. Una oficina del Departamento de Estado también se ocupa específicamente de la delincuencia organizada y Estados Unidos es uno de los pocos países de la región que cuenta con una agencia federal dedicada específicamente a las armas: la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Por otra parte,

el Departamento de Justicia, a través de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y de la Fuerza Conjunta Nacional de Ciberinvestigación, lidera los esfuerzos estadounidenses para combatir la ciberdelincuencia. Sin embargo, aunque las fuerzas del orden estatales y locales reciben más recursos, lo que puede indicar que se da prioridad a la lucha contra la delincuencia organizada, siguen preocupando cuestiones como la falta de cualificación de los mandos, la escasa selección de candidatos y la escasa formación del personal. Los asesinatos policiales, que presentan disparidades raciales, han erosionado la confianza pública en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los índices de brutalidad policial se han mantenido constantes desde la muerte de George Floyd y los esfuerzos por reformar el sistema policial estadounidense han sido limitados.

Estados Unidos comparte fronteras terrestres con Canadá y con México y la frontera con México supone un importante reto para la integridad territorial del país, debido a su proximidad a múltiples mercados delictivos transnacionales. Los funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras vigilan cientos de puntos de entrada terrestres, marítimos y aéreos, pero su eficacia se ha puesto en entredicho, debido a que las redes delictivas eluden continuamente las normas fronterizas estadounidenses. Estados Unidos está considerado el país con mayor capacidad cibernética del mundo, tanto en términos de piratería informática como de defensa digital. La creciente dependencia del país de la tecnología ha ampliado el número de objetivos potenciales de piratería informática y el creciente descaro de los adversarios geopolíticos, como Rusia, China, Irán y Corea del Norte, hace que Estados Unidos sea muy vulnerable a los ciberataques. Además, el internet de las cosas ha provocado un aumento de los ataques contra la Administración, mediante un repunte de delitos como el espionaje de organismos gubernamentales, el robo de información sensible de entidades de los sectores público y privado, el robo de propiedad intelectual y la destrucción de equipos informáticos.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

El dominio mundial del dólar estadounidense lo hace muy vulnerable al blanqueo de capitales, dada la enorme magnitud de las transacciones financieras mundiales que fluyen a través de las instituciones bancarias estadounidenses. Estas transacciones implican delitos como el fraude, el narcotráfico, el contrabando de personas, la trata de seres humanos y la corrupción. En los últimos años, se han llevado a cabo reformas a gran escala, destinadas a aumentar la capacidad del país en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, la Red para la Represión de Delitos Financieros, que es el principal organismo de vigilancia de la lucha contra el blanqueo de capitales, ha estado infradotada y sobrecargada de trabajo, por lo que carece de la capacidad adecuada para combatir eficazmente el blanqueo de capitales. Se calcula que aproximadamente una cuarta parte de los fondos blanqueados en el mundo

se realizan a través de instituciones financieras con sede en Estados Unidos. Aunque la mayoría de los estados de EUA cuentan con sólidos marcos legislativos contra el blanqueo de capitales, los riesgos de blanqueo de capitales tienden a variar según el estado.

Aunque en Estados Unidos no falta capacidad de regulación económica, la voluntad política de facultar y fomentar una supervisión adecuada sigue siendo un reto. A pesar del aumento del PIB per cápita tras la pandemia, el aumento de los precios al consumo debido a la «gran dimisión», la escasez de chips y los problemas con la cadena de suministro mundial impulsaron un repunte de la inflación a lo largo del 2022, que alcanzó el nivel más alto en 40 años. EUA es la mayor economía del mundo, pero el creciente gasto público excesivo y la politización del techo de la deuda plantean graves riesgos para la economía nacional y la mundial.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

En los últimos años han aumentado los esfuerzos para apoyar a las víctimas y los testigos de delitos y existen numerosos programas de apoyo a víctimas y testigos en todo el país. Sin embargo, los más comunes siguen siendo gestionados por organizaciones sin ánimo de lucro y religiosas, seguidas de organizaciones gubernamentales. El Programa Federal de Seguridad de Testigos de Estados Unidos ofrece protección las 24 horas del día a todos los testigos y no ha habido informes de que los testigos que siguen las directrices del programa hayan sufrido daños o hayan sido asesinados mientras estaban bajo su protección. Los esfuerzos de los medios de comunicación nacionales también han aumentado la eficacia de los servicios estadounidenses de apoyo a víctimas y testigos.

Los esfuerzos del Gobierno estadounidense para prevenir el crimen organizado se enfrentaron a dificultades durante la anterior Administración, pero se están recuperando. El enfoque de la estrategia contra el narcotráfico se ha desplazado hacia un planteamiento sanitario preventivo, con mayor inversión en el tratamiento de adicciones y en analgésicos alternativos. Sin embargo, los críticos reclaman campañas más amplias de concienciación pública para prevenir los problemas relacionados con las drogas. Las autoridades también han tratado de limitar tanto la producción nacional como la importación extranjera de opiáceos, mediante ayudas antinarcóticos a los países de origen, restricciones legales a la prescripción médica de opiáceos y enfoques rehabilitadores hacia los consumidores de opiáceos. En cuanto a la ciberseguridad, Estados Unidos está desarrollando iniciativas preventivas a nivel federal y estatal, en respuesta al creciente número de ciberataques, especialmente de ransomware.

Los agentes de la sociedad civil prestan una parte significativa de los servicios de apoyo a víctimas y testigos disponibles en Estados Unidos. Mientras que la legislación concede amplias libertades a las ONG que persiguen sus respectivos programas

cívicos o políticos, los sindicatos carecen de libertades similares y su fuerza ha disminuido considerablemente. Los estados que tienen gobiernos republicanos también han aprobado leyes electorales problemáticas, que han dificultado la votación y han aumentado el riesgo de mayor interferencia partidista en la gestión, el recuento y la certificación de los votos. El país presume de una sólida tradición de libertad de prensa y de medios de comunicación. Sin embargo, persisten varios problemas crónicos, a pesar de algunos avances de la actual Administración. En particular, el acoso en línea a periodistas, especialmente mujeres y minorías, amenaza su seguridad y su calidad de vida. La desconfianza pública en los medios de comunicación alcanzó niveles sin precedentes, debido a cuestiones como la polarización mediática, el fomento de peligrosas teorías conspirativas, la desaparición de medios de información locales y el debilitamiento del periodismo por las redes sociales y otras plataformas digitales. El impacto residual de la polarización generalizada, la desinformación y la incitación a la violencia ha provocado una erosión persistente de la cohesión social y política, así como revueltas violentas.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.